

Editorial

Un nuevo 27F

Hoy se cumple un nuevo aniversario del devastador terremoto del 27 de febrero de 2010, que sacudió la zona centro-sur de nuestro país, dejando una estela de destrucción que afectó miles de viviendas e infraestructura pública. Han pasado 15 años, y en la mayoría de los casos las construcciones han sido reconstruidas. Sin embargo, aún persisten heridas abiertas: edificaciones históricas como la Iglesia de Coinco siguen esperando su restauración, al igual que muchas familias que aún no han podido recuperar o renovar sus hogares.

Pero hoy nos enfrentamos a una nueva amenaza, una que también deja a su paso destrucción y caos, aunque su origen no es natural, sino humano. No nos referimos solo a la pandemia, la guerra en Ucrania o los mega incendios forestales, fenómenos que parecen haberse vuelto parte de nuestra realidad cotidiana. Nos referimos a un evento que expuso una vulnerabilidad crítica del país y que, en cierta forma, fue un "terremoto" en otro ámbito.

El pasado martes, Chile sufrió un apagón masivo que dejó sin electricidad a más de 19 millones de personas por largas horas. Este corte, cuyas causas aún no están del todo claras, evidenció la fragilidad del sistema energético y la ausencia de estrategias efectivas para mitigar el impacto de estas crisis. Pero, más allá de la falta de energía, el evento dejó en evidencia una vulnerabilidad que hasta ahora no estaba en el radar de muchos: la debilidad de los sistemas de comunicación.

Pese a que se supone que las torres de telecomunicaciones tipo 2 cuentan con una autonomía de cuatro horas, numerosos testimonios reportaron una drástica disminución en la velocidad de internet a solo minutos de iniciado el apagón. Esto, en una situación de emergencia, puede ser crítico. Comunicarse con familiares se vuelve un desafío y, en escenarios donde se decreta toque de queda, el acceso a internet es fundamental para obtener salvoconductos o realizar trámites esenciales. Incluso

en situaciones más cotidianas, como viajar a otra ciudad, el apagón generó caos: muchas empresas de transporte no sabían qué boletos habían sido vendidos y cuáles no, evidenciando la total dependencia de los sistemas digitales.

Además, esta crisis pone sobre la mesa el impacto de la eliminación progresiva de la tecnología 2G, que hasta hace poco servía como respaldo en situaciones de emergencia. A diferencia de las redes 4G y 5G, que dependen de una infraestructura energética robusta, el 2G operaba con menor consumo de energía y permitía mantener una mínima conectividad cuando todo lo demás fallaba. La decisión de dismantelar esta tecnología, sin haber asegurado una alternativa confiable, deja en evidencia la falta de previsión de las autoridades y empresas del sector. Este apagón no solo es una advertencia sobre la necesidad de invertir en infraestructura y tecnología, sino también sobre la importancia de agilizar los procesos burocráticos para que esas inversiones puedan concretarse a tiempo. En este sentido, la llamada "permisología" cobra especial relevancia: los trámites excesivos y la demora en la aprobación de proyectos estratégicos han ralentizado la modernización de nuestro sistema energético y de comunicaciones, dejando al país expuesto a fallos que podrían haberse evitado.

Este incidente reabre el debate sobre la resiliencia del país frente a eventos de gran escala y la necesidad urgente de fortalecer las redes de comunicación y energía. No se trata solo de invertir más, sino de hacerlo con visión de futuro, priorizando soluciones que garanticen la continuidad de los servicios esenciales ante emergencias. La responsabilidad del Estado en este aspecto es ineludible, así como también la de las empresas que operan en sectores clave.

Han pasado 15 años desde el terremoto del 27F, y aunque hemos aprendido muchas lecciones, este nuevo "terremoto" nos recuerda que aún quedan muchas más por aprender.

LUIS FERNANDO GONZÁLEZ
SUB DIRECTOR